

SEGURIDAD EXTERNA Y SEGURIDAD INTERNA: EXIGEN TRATAMIENTOS DIFERENCIADOS EN LA LEY Y EN LAS POLÍTICAS DE ESTADO

*Bertha García Gallegos**

En este mes de Junio, la Comisión Legislativa dio paso al texto definitivo del proyecto de Ley de Seguridad Pública y del Estado y lo envió al Ejecutivo. Este es un hecho de enorme significación para el país y exige el seguimiento de rigor. El intento de cambiar la doctrina y la letra de la Seguridad Nacional, introducida por las dictaduras, y que ha regido por más de 46 años en este país, es un cometido histórico importante encarado por el gobierno actual. Sin embargo, llama la atención que el proceso de discusión y de elaboración de semejante cambio de doctrina haya transcurrido casi en las sombras. Las memorias de los encuentros, que circulan con poca difusión, hablan de una amplia consulta a sectores sociales, organizaciones y movimientos, en diversas provincias del país lideradas entre, julio y agosto de 2008 por el entonces ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea con el apoyo del Centro Carter y de la ALDHU. También los ministerios de defensa, relaciones exteriores y comercio, gobierno, cultos y policía, subsecretaría de riesgos, subsecretaría de corrupción habrían contribuido con sus análisis de las amenazas a la seguridad en cada sector y de las estrategias para enfrentarlas.

Detrás de la profusa retórica de los textos de la "Estrategia de Seguridad Interna y Externa; soberanía y democracia", se concibe una actitud demagógica que no pasa más allá de la fenomenología de los hechos y pretende sacar de allí toda una doctrina y armazón institucional de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional. Las consultas sirven como siempre de cortina y esconden la falta de experticia y de un acercamiento más científico a la problemática tan compleja de la seguridad en el mundo actual. Esto se confirma si se analiza el escabroso

CONTENIDO

EDITORIAL
SEGURIDAD EXTERNA Y SEGURIDAD
INTERNA: EXIGEN TRATAMIENTOS
DIFERENCIADOS EN LA LEY Y EN LAS
POLÍTICAS DE ESTADO

PÁG. 1

ESTABILIDAD POLÍTICA EN LATINOAMÉRICA
Y ROL DE LAS FUERZAS ARMADAS
José Manuel Ugarte.

PÁG. 2

EL NARCOTRÁFICO EN LA FRONTERA
COLOMBO-ECUATORIANA
Hernán Moreano Urigüen.

PÁG. 3

CAMBIOS EN LA UNIDAD DE
INVESTIGACIONES ESPECIALES
DE LA POLICÍA
Paola Escobar Garzón.

PÁG. 5

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA
ORGANIZÓ SEMINARIO SOBRE SEGURIDAD
COMO CONTRIBUCIÓN AL DEBATE
LEGISLATIVO
Bertha García Gallegos.

PÁG. 7

CRONOLOGÍA DEFENSA, SEGURIDAD
PÚBLICA Y CIUDADANA
Mayo - Junio 2009

PÁG. 9

camino que han seguido los representantes del régimen para plasmar en la letra de una Ley toda la retórica acumulada. Desde un proyecto elaborado por el mismo COSENA, portador de la antigua doctrina que intentaba pasar por nueva, a través de varios proyectos discutidos siempre con premura en la Comisión Legislativa, hasta varios intentos –uno de ellos sobre Inteligencia– circulados por la prensa en medio de sospechas.

Al fin, a comienzos de Junio mientras los comisionados trataban de dar los últimos pulimentos al texto tan traído y debatido, sorpresivamente llegó a sus manos un nuevo texto –éste sí “el texto”– que integra no solo el tema de la Seguridad en sus distintas dimensiones, sino también el de la Inteligencia del Estado. Llama la atención el hecho de que nadie se haya toma-

do la molestia de investigar la verdadera estructura institucional que está detrás de los conceptos de la “antigua” Seguridad Nacional en este país. De modo que con nueva retórica, la nueva ley corre el peligro de repetir las mismas estructuras del pasado y por supuesto, las mismas prácticas. Tampoco se ha tomado en cuenta que el pasado nos enseña a través de sus errores, y que un indicador de los gobiernos democráticos es la clara separación entre las funciones de la defensa y de la seguridad pública, lo que implica que las Fuerzas Armadas se circunscriban al ejercicio de las misiones de naturaleza militar, en tanto que la Policía se ocupe de aquellas relacionadas con el control interno.

* Directora Programa DSD

ESTABILIDAD POLÍTICA EN LATINOAMÉRICA Y ROL DE LAS FUERZAS ARMADAS

José Manuel Ugarte.*

1. El rol tutelar de las Fuerzas Armadas

El reciente golpe de Estado en Honduras ha puesto la atención sobre un aspecto que no suele vincularse con hechos de esa índole: el rol constitucional de las Fuerzas Armadas hondureñas. Conforme establece el artículo 272 de la Constitución de 1982 –reiteradamente reformada– tales Fuerzas. ...*Se constituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República...*

No deja de resultar notable que tal misión haya sobrevivido a las reiteradas reformas constitucionales –fundamentalmente las de 1994, 1995 y 1998–, realizadas por los gobiernos liberales de Carlos Roberto Reina Idíáquez y Carlos Roberto Flores Facussé. Ellos se empeñaron en establecer la subordinación de las Fuerzas Armadas respecto del poder constitucional. Es paradójico, que estas fuerzas aparezcan hoy apoyando el golpe de Estado. Cabe advertir que a diferencia de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá, Honduras tuvo la fortuna de no conocer los conflictos que asolaron a estos países, aunque no estuvo exenta de sufrir elementos de violencia difusa y represión. En El Salvador, Guatemala y Nicaragua los conflictos armados internos determinaron la instauración de procesos de paz dirigidos por Naciones Unidas, o transiciones negociadas que llevaron a la real o virtual supresión de las Fuerzas Armadas. En Panamá lo mismo ocurrió pero a raíz de la invasión estadounidense en 1989.

En definitiva, las reformas realizadas en Honduras respecto a la autonomía de las fuerzas armadas y la militarización de la seguridad interior tuvo menor profundidad que en los casos mencionados; bien que en Guatemala, hasta el momento, no han podido concretarse las reformas constitucionales compro-

metidas en los Acuerdos de Paz. Costa Rica, careciendo de fuerzas armadas, obvió la problemática aquí referida.

2. Las Reformas constitucionales centroamericanas al rol de las Fuerzas Armadas

Resulta de interés comparar la misión constitucional asignada a las Fuerzas Armadas hondureñas, con la asignada a los restantes países centroamericanos señalados. Cabe advertir que tal misión, en los últimos, es **sensiblemente más limitada, bajo influencia de la doctrina argentina establecida en las Leyes N° 23.554 de Defensa Nacional y N° 24.059 de Seguridad Interior.**

En efecto; el artículo 212 de la Constitución de El Salvador establece que ...*La Fuerza Armada tiene por misión la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio. El Presidente de la República podrá disponer excepcionalmente de la Fuerza Armada para el mantenimiento de la paz interna, de acuerdo con lo dispuesto por esta Constitución...* (Excepcionalmente, si se han agotado los medios ordinarios para el mantenimiento de la paz interna, la tranquilidad y la seguridad pública, artículo 159 Inc. 12).

Ello así, aunque es preciso reconocer que también establece en el segundo párrafo del referido artículo 121 la facultad de los órganos fundamentales legislativo, ejecutivo y judicial de recurrir a dichas Fuerzas para hacer cumplir las disposiciones que hayan adoptado en sus respectivos ámbitos de competencia, aspecto que evidentemente introduce aspectos riesgosos, al afectar la necesaria unidad de conducción y mando que debe existir respecto de las Fuerzas Armadas, conducción y mando que a nuestro criterio, debe residir en el órgano ejecutivo.

Por su parte, la Constitución de Nicaragua dispone en su artículo 92 que ...*El Ejército de Nicaragua es la institución armada*

para la defensa de la soberanía, de la independencia y la integridad territorial.

Sólo en casos excepcionales el Presidente de la República, en Consejo de Ministros podrá, en apoyo a la Policía Nacional, ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua cuando la estabilidad de la República estuviera amenazada por grandes desórdenes internos, calamidades o desastres naturales...

Finalmente, el *Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, integrante de los Acuerdos de Paz* suscriptos en Guatemala bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas, estableció en su apartado 35, que *...La misión del Ejército de Guatemala queda definida como la defensa de la soberanía del país y de la integridad de su territorio; no tendrá asignadas otras funciones y su participación en otros campos se limitará a tareas de cooperación....* Cabe destacar, no obstante, que aún no han logrado concretarse la reforma constitucional que permitiera incorporar esta disposición al texto constitucional guatemalteco.

Salta a la vista el carácter más limitado y estricto de la misión de las Fuerzas Armadas que surge de estos textos, también centroamericanos, respecto del vigente en Honduras.

3. Conclusiones

Ciertamente, atribuir los hechos acaecidos en Honduras a la misión asignada por la Constitución hondureña a las Fuerzas

Armadas, constituiría una simplificación, como también lo sería atribuir tales hechos en exclusividad a las referidas Fuerzas. No obstante, resulta indudable que asignar a las Fuerzas Armadas la misión de mantener la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, o aún el imperio de la Constitución, implica otorgarles un rol tutelar respecto del sistema republicano y democrático, que en definitiva pone en entredicho la plenitud de la vigencia de dicho sistema, que no puede soportar tutelas de ese tipo.

Resulta evidente que en los países latinoamericanos, durante la Guerra Fría, tuvo lugar la asignación a las Fuerzas Armadas de roles políticos y de carácter tutelar respecto de las instituciones democráticas que se reflejaron —y aún, en algunos casos, se reflejan— en las respectivas Constituciones, y que han derivado en significativos perjuicios para las respectivas sociedades, y aún, para las propias Fuerzas Armadas.

Mientras el restablecimiento de la vigencia del sistema democrático en Honduras constituye una tarea inexcusable y urgente para la región y sus sociedades, cabe reflexionar respecto de la necesidad de trabajar para concluir con estos restos normativos, de un pasado que todos deseamos en definitiva superar.

** José Manuel Ugarte es abogado y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Corredor de las Leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior.*

EL NARCOTRÁFICO EN LA FRONTERA COLOMBO-ECUATORIANA

Hernán Moreano Urigüen*

1. Cotidianidad, droga y violencia en la "frontera norte"

La lucha contra el narcotráfico ha conllevado una mayor securitización de la frontera ecuatoriano – colombiana, política que paradójicamente no ha conseguido una mayor "seguridad" para las poblaciones fronterizas. En el Libro Blanco, 2006, las Fuerzas Armadas Ecuatorianas determinaron sus nuevas misiones en la defensa de la soberanía: 1) Combate a los Grupos Ilegales Armados Colombianos – Giac; 2) Protección del complejo hidrocarbúfero; 3) Lucha contra el narcotráfico; y 4) Control de gasolina blanca. Como resultado de las operaciones en el año 2006 se hallaron 45 bases de las FARC en Ecuador; en el 2007 ese número subió a 47. Durante el 2008 los patrullajes se redoblaron, sin embargo el balance a diciembre fue de 182 bases detectadas. En las olvidadas poblaciones limítrofes con Colombia los grupos ilegales operan con facilidad, incluso con el apoyo de los habitantes. La frontera sigue siendo vista por los estados, como el inicio y el final del territorio nacional. Para los pobladores es su cotidianidad. Solo que esa cotidianidad por ahora está marcada por el narcotráfico.

Ecuador no es un país productor de drogas como sí lo son Bolivia, Colombia y Perú, que se han caracterizado por tener enormes hectáreas de coca. Aquí, en las zonas fronterizas, se han hallado y destruido cultivos de dos a tres hectáreas, según voceros de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional. En estas tierras es muy común el término "traqueteo", que en Colombia significa: "individuo relacionado directamente con el tráfico de sustancias ilegales" —cocaína y marihuana—. El nombre suele darse, sobre todo, a los mandos medios o a quienes se destacan por la ostentación del dinero que trae el tráfico ilegal.

Hacia 1998 los comerciantes que navegaban desde la ciudad de Leticia (departamento colombiano del Amazonas, colindante con Brasil y Perú) hasta Puerto Asís (departamento del Putumayo, que colinda con el Ecuador) advirtieron que el comercio de la base de coca que llegaba a Leticia procedente de Perú y Bolivia era un gran negocio. A mediados de la década de los setenta, luego de los ensayos en Puerto Asís, los cultivos de hoja de coca en el Putumayo se centraron en el valle del Guamués y en las zonas fronterizas, donde los grandes capos del narcotráfico compraron la tierra para sembrar inmensas extensiones de la hoja de coca.

Ecuador fue el único país andino que, hasta mediados de los años 80, jugó un papel marginal en la economía política del narcotráfico. Su tardía inserción se dio en primera instancia como un minúsculo productor de coca, debido a que no contaba con recursos para el cultivo extensivo de la planta. Las cosas se complicaron cuando la guerrilla de las FARC llegó al Putumayo a mediados de los 70, mientras que los cultivos de hoja de coca lo hicieron a inicios de los 80. A comienzo de la década de los 90 se intensificó el proceso de cocalización del agro en el mismo sector. Mientras los habitantes han carecido de infraestructura vial, asistencia técnica, crédito y ayuda estatal para los cultivos tradicionales de maíz, papa, plátano, yuca y arroz; los cultivos y el mercado de la coca les ha ofrecido considerables ventajas: pago al contado, mayor margen de rentabilidad, garantía del mercadeo y el no requerimiento de fletes de transporte. Las fumigaciones aéreas con glifosato en los departamentos del Guaviare y Caquetá, han producido un desplazamiento de los cultivos hacia el sur del país¹. Hasta el año 2007, en Nariño se sembraron 20.259 hectáreas de hoja de coca y en Putumayo 14.813 según Informe anual de Naciones Unidas.

En los últimos años, el Ecuador no solo ha debido lidiar con los problemas derivados de la ilegalidad del tráfico de drogas en Colombia, sino que además su frontera colinda con los frentes: 13, 29, 32 y 48 de las FARC. En la actualidad, además de la presencia de grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes se suma un nuevo actor: las bandas compuestas con disidentes y desmovilizados de los dos primeros grupos, conocidas como Águilas Negras, Rastrojos y Organización Nueva Generación (también conocida en la zona como ONG). Se concentran al sur del departamento colombiano de Nariño y su fin es coordinar las rutas de la cocaína hacia el Ecuador para luego llevarla hacia los Estados Unidos vía marítima. Las poblaciones ecuatorianas de San Lorenzo, Borbón y Campanita en la provincia de Esmeraldas, y Jama en la provincia de Manabí soportan a diario actos violentos ligados al narcotráfico.

El Ecuador ha buscado mantenerse al margen del conflicto colombiano; pero esta posición puede ser indicativa de la propia incapacidad del Estado para invertir recursos económicos y políticos en un problema que considera ajeno. La sensación de inseguridad por parte de Ecuador está determinada por la percepción de que el gobierno colombiano no es capaz de controlar su territorio y las acciones de los actores violentos que dentro de él operan. La zona más vulnerable para el Estado ecuatoriano es, sin duda, la frontera Norte, y hasta el momento su objetivo prioritario ha sido solucionar los problemas resultantes de la creciente cantidad de refugiados y/o desplazados, de las actividades ilícitas, entre otros.

En el Carchi muchos campesinos y comerciantes de la zona manifiestan su incomodidad por los operativos de seguridad implementados por policías y militares, a lo largo de la carretera Tulcán-Maldonado. "Me hacen sentir como si fuera un delincuente, me hacen abrir todas mi maletas para ver si llevo algo malo y me piden los documentos", dice un viajero de la ruta

Tulcán-Tufiño. Por ahora, en Carchi se han ubicado unos 1.000 militares. En el cordón fronterizo trabajan tres unidades que refuerzan la vigilancia externa del país². "...el pueblo vive del Turismo y no hay fuentes de trabajo por la mala imagen que dan los medios de comunicación. La gente no viene ya a distraerse. Los campesinos gastan lo poco que tienen en alcohol", dice un morador de Tufiño.

En **San Lorenzo, Esmeraldas**, la mayoría de moradores viven de la pesca, la recolección de concha y de los trabajos en las Palmicultoras de la zona. Estas condiciones los han llevado a entablar nexos con los negocios ilícitos que les representa una buena entrada económica³. "Es un secreto a voces" los vínculos con la guerrilla, los paras o los narcos para poder subsistir, "es un buen negocio y lamentablemente no hay otras alternativas para vivir", dice un pescador de la zona.

Las relaciones de los moradores con los militares y policías son relativamente buenas; pero "son dos mundos diferentes ...ellos viven en sus cuarteles y nosotros en la ciudad", dice la representante de la Fundación Génesis. La presencia de infantes de marina y policías es intermitente. Por ejemplo, en Mataje los infantes van dos veces a la semana para ver la situación de la frontera, "se quedan una hora y luego se van". En el caso de Palma Real los infantes de marina y policías hacen presencia para el control de documentos tanto a extranjeros como a nacionales. A inicios del 2004, los moradores habían solicitado a los infantes navegar más seguido por la alta cantidad de robos a pescadores por parte de piratas colombianos, "la acción no se la realizó, pero los paras de Tumaco nos hicieron ese favor [...] ahora navegar por el mar es más tranquilo", dice un pescador.

En **Sucumbíos** se advierte fuertemente la violencia que se desarrolla al otro lado de la frontera entre los actores armados. Según una madre de familia de Puerto Mestanza, "los combates causan graves daños psicológicos en los pequeños [...] el mínimo ruido los despierta". Otro campesino que cruza la frontera para ganarse algunos pesos cosechando hoja de coca cuenta que la violencia le impide trabajar y generar algún ingreso para su familia. Se conoce que unos 120 campesinos de la zona se dedican a esta actividad. A nivel económico, los combates que se dan a pocos metros de la frontera, reducen al máximo las actividades productivas. Decenas de comerciantes informales que cotidianamente comercializan, ropa, calzado, cilindros de gas y combustibles, se quejan: "...cuando la frontera se cierra nuestras actividades comerciales se vienen abajo y lo que solemos hacer es irnos para otros lados más pacíficos", dice un vendedor de la zona.

2. Presencia militar y policial

En Ecuador, la presencia de subversivos en su frontera con Colombia, la conciencia de que ésta es utilizada como lugar de descanso, aprovisionamiento y recuperación de insurgentes colombianos heridos, además de la reiterada asepsia por parte

1. Entrevista a líder cocalero en Mocoa-Putumayo, el 27 de noviembre de 2007.

2. Datos proporcionado por oficial del COMACO, febrero de 2005.

3. Entrevista a varios dirigentes gremiales de San Lorenzo del 4 al 9 de abril de 2005.

de los gobiernos han determinado que desde 1999 se incrementa la presencia de las fuerzas militares y policiales. Según lo expresado por el Presidente Correa, existen actualmente en la zona 7.000 uniformados⁴ organizados en 14 destacamentos militares. Se calcula que éste resguardo territorial tiene un costo de un millón de dólares anuales. Últimamente han aumentado 3000 uniformados más. Es decir, que ya hay 10.000 militares en la zona. Por su parte, en el período 2006-2008, la Policía Nacional decomisó aproximadamente 68 toneladas de droga valorada en 272 millones de dólares en el mercado norteamericano. Se destruyó un laboratorio clandestino de 1.500 m² de superficie, confiscando 4.400 kilos de sustancias sólidas y 5.100 litros de líquidos ilícitos. Con esta operación se desarticuló la posibilidad de procesar al menos 2 toneladas de cocaína mensuales. Se erradicaron 4 áreas de cultivos ilícitos de coca.

Estos hechos han revelado que el crimen organizado tiene en el país el mejor centro de acopio de droga en Latinoamérica. "Los delincuentes se aprovechan de los limitados controles de las fuerzas del orden, de la descoordinación entre esas entidades y de una justicia sumida en una crisis sin precedentes por la politización y la corrupción a todo nivel"⁵. Por ello, este país se ha convertido en una plataforma⁶ de envío de cocaína a los Estados Unidos y Europa, y de insumos químicos para la elaboración de la droga en el sur de Colombia.

El sistema delictivo creado, no solo involucra a los narcotraficantes y a los miembros de toda la red criminal. También cuenta con la complicidad de autoridades en diferentes ámbitos del Estado. La red ha penetrado las estructuras del sistema financiero para lavar las ganancias que deja el ingreso de las drogas ilícitas. La falta de una ley que reprima el lavado de activos tiene atada de manos a la Policía y la fiscalía. Entre mayo y junio –primera temporada de cosecha de la hoja de coca en las plantaciones del Putumayo Colombia– se incrementa el flujo de cargamentos de coca que ingresa al país convertida en pas-

ta base de cocaína⁷. La espiral de distribución de la cocaína se inicia en la zona norte de Sucumbíos, frontera con Colombia, donde poblaciones como Puerto Nuevo y Puerto el Carmen son los puntos de acopio de la coca. Los militares ecuatorianos, junto con la Policía, sostienen que en esa primera parte del tráfico están comprometidas las FARC, especialmente el denominado Bloque Sur, que controla el Departamento del Putumayo colombiano. Los insurgentes –según Inteligencia militar del Ecuador– son los encargados del acopio de la base y de organizar su traslado hasta Esmeraldas. La droga viaja por carreteras de segundo y tercer orden del Ecuador, desde la Amazonía, para luego regresar a Colombia, a través del departamento de Nariño (Colombia). El estupefaciente refinado retorna vía fluvial o terrestre a Ecuador para ser enviado al exterior. El acopio de la mercadería ilegal se efectúa en urbes como Santo Domingo, Quito y Guayaquil. La droga se reenvía desde los puertos marítimos de las provincias de El Oro, Guayas y Manabí. Otros puntos de salida son las terminales aéreas de Quito y Guayaquil.

Según fuentes oficiales de la Policía Nacional ecuatoriana, los narcos se arriesgan a ingresar y salir vía Ecuador, por economía; el sur de Colombia está bajo el control de las FARC, con los frentes 32 y 48. Así, los narcotraficantes evitan cruzar por Colombia para no pagar tributo a cada retén. En los tres últimos años se han capturado más de 13 toneladas de droga en la provincia de Esmeraldas. Los casos más sonados fueron "Huracán Verde" y "Huracán de la Frontera", desarrollados en el 2007 y 2008, respectivamente. Otra operación de mucha importancia fue la Tormenta del Pacífico, que se cumplió paralelamente en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas.

Pequeños traficantes de droga caen en las principales ciudades del país, lo que ha originado una sobrepoblación en las cárceles de Quito y Guayaquil. De los 11.000 detenidos que existen, 3.090 son por delitos relacionados con el narcotráfico, según la Dirección de Rehabilitación Social. La mayoría de ellos no tiene condenas en firme.

4. Repartidos de la siguiente manera: 5000 militares y 2000 policías del Ecuador.

5. Entrevista a politólogo ecuatoriano sobre lucha contra las drogas en el Ecuador. 6 de abril de 2006.

6. Según la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional del Ecuador los narcotraficantes utilizan los puertos de de Guayaquil y Manta, en Manabí, como vías de salida. Según entrevista a ejecutivo de Base Ecuador, empresa de seguridad del terminal marítimo, Guayaquil recibe un flujo de 500 contenedores al día. Los 30 agentes antinarcóticos de ese puerto no alcanzan a revisar. "Se sacan perfiles de los contenedores pero en ese margen de error se puede ir la droga".

7. Balance del Grupo Especial Móvil Antidrogas de la Policía (GEMA). Mayo 2005.

* Investigador ecuatoriano asociado al programa de Relaciones Internacionales de la FLACSO-Ecuador. Master en Relaciones Internacionales. Experto en temas de seguridad y defensa en la región andina.

CAMBIOS EN LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES ESPECIALES DE LA POLICÍA

Paola Escobar Garzón*

El 28 de marzo pasado, el Gobierno ordenó la eliminación de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía (UIES) y creó la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO). Con ello, se puso fin a más de 20 años de resultados en la lucha contra el crimen organizado y sus delitos conexos:

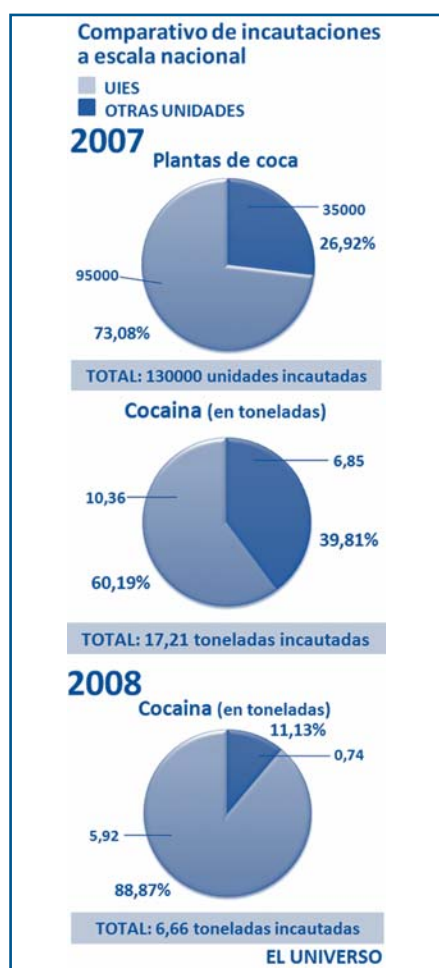
narcotráfico, lavado de activos, guerrilla, tráfico de personas y armas.

La UIES nació en 1985 mediante un decreto del ex presidente León Febres Cordero y desde la década de los noventa acogió el nombre que ha llevado hasta ahora: Unidad de Investigaciones Especiales (UIES). En los últimos años, esta unidad ha

estado bajo la mira de los sucesivos gobiernos. Por ejemplo, en el gobierno de Lucio Gutiérrez se intentó eliminarla por varias investigaciones que ejecutó. Ahora, se la indaga por sus supuestos vínculos con agencias extranjeras de Inteligencia, específicamente con la CIA de EE.UU. Esta sospecha surgió luego de las fallas en la entrega de información al Gobierno, tras el ataque a la base de las FARC en el caserío ecuatoriano de Angostura, provincia de Sucumbios. Entonces el presidente Rafael Correa fustigó a las unidades especiales de Inteligencia de las FF.AA. y de la Policía, alegando que mantenían presuntos vínculos con la CIA.

Creada en 1985 como una unidad autónoma, adscrita a la Policía Nacional, la UIES trabajaba en coordinación directa con la Embajada de Estados Unidos. Hasta el año 2008 realizó 173 operativos, en los que detuvo a 1.355 delincuentes, decomisó 287.000 plantas de amapola y coca, 111,5 toneladas de cocaína, 34 de marihuana, 196.557 gramos de pasta base de cocaína, 28.933 gramos de heroína y 413 armas. Solo entre el 2007 y el 2008 en Ecuador la Policía incautó 23,87 toneladas de cocaína, 68% corresponde a la UIES y el restante 32% a operaciones de otras unidades policiales.

Los resultados obtenidos por la UIES le permitieron al Ecuador ubicarse como el tercer país en Latinoamérica y el sexto en el mundo en la lucha antidrogas, según Manuel Silva, quien fue jefe de la UIES desde 1992 hasta febrero del 2009.



Como compensación, Estados Unidos incluyó a Ecuador en la lista de países beneficiarios de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, que otorgan exoneración de aranceles a determinados productos nacionales de exportación. Esta información consta en un informe entregado por Silva a la Comisión de Fiscalización del 'Congresillo' (Comisión Legislativa de la Asamblea Nacional) que tramita un pedido de juicio político al ex ministro de Gobierno y de Seguridad Interna, Gustavo Larrea acusado de mantener relaciones con las FARC.

Durante los 20 años de su existencia, la UIES se mantuvo como una unidad autónoma. La Policía destinaba alrededor de 200.000 dólares por año para sus gastos administrativos, mientras la Embajada de Estados Unidos entregaba de \$2 a \$3 millones anuales para gastos operativos, además de brindar capacitación y tecnología.

Para integrar la UIES, los aspirantes debían someterse a un estricto proceso de selección, que incluía una indagación personal y familiar y una prueba de polígrafo, que garantizaba su idoneidad para trabajar contra el crimen organizado. En agosto del 2008, el comandante general de la Policía, Jaime Hurtado, por disposición del entonces ministro de Seguridad, Gustavo Larrea, ordenó el pase de 20 efectivos de la UIES a la Presidencia de la República, bajo órdenes del capitán Rommy Vallejo, jefe de Seguridad de Carondelet.

Luego del actual impase, a Silva y a otros tres oficiales, el Consejo de Generales de la Policía les asignó otras funciones, pero finalmente esta disposición no fue ejecutada.

El Proceso de Manuel Silva después de pasar por la UIES

El jefe de la UIES, Manuel Silva, se encuentra en una situación jurídica incierta. Enfrenta un proceso administrativo por supuesta mala conducta profesional. El Consejo de Generales le dio la baja por desertión, medida que está bajo análisis del ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh. La sesión de generales fue presidida por Alfonso Camacho, el único oficial que votó en contra de la baja. Esta medida fue tomada el 16 de abril pasado porque, según el informe, Silva no se presentó en la Policía Judicial de Tungurahua, donde fue asignado el 4 de febrero, luego de dirigir un operativo fallido para capturar a José Ignacio Chauvín, ex subsecretario de Gobierno acusado de cómplice de narcotráfico.

Tras ello, Silva aclaró que nunca fue informado del expediente, pese a que se presentó el 7 de abril ante el comandante general, Jaime Hurtado, luego de más de dos meses en la clandestinidad. Pidió al Consejo que escuche su versión. Acudió ante el ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, quien ofreció garantizar el debido proceso.

Silva consideró contradictorio que primero lo juzguen y luego investiguen y lo llamen a declarar. Recordó que hasta el viernes el Consejo debió responder su apelación. Por ello, el lunes presentó una demanda por silencio administrativo.

Reemplazo de la UIES.- La Policía Nacional inauguró el pasado 16 de junio, la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO) "Mayor Eduardo Zea López". El acto se desarrolló en las instalaciones del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), en Pusuquí. Gustavo Jalkh, ministro de Gobierno y Policía, señaló que la unidad contará con un presupuesto de \$1,4 millones. Añadió que se está dialogando con la Embajada de EEUU y con otros países, como Chile y España, para establecer cooperación.

En el acto, su nuevo Director, Juan Carlos Rueda, recordó que este organismo dará apoyo a todas las unidades de investiga-

ción policial y coordinará la cooperación con agencias internacionales, en el marco de los procedimientos acordados por la Cancillería para este tipo de relaciones. La creación de ULCO se encuentra en la estructura de Inteligencia de la Policía y del nuevo Sistema de Inteligencia del Estado, en el cual se trabaja a nivel legislativo y sobre el que hay un decreto ejecutivo. Fue aprobada el 26 de marzo de 2009, con la resolución 2009-259-CSG-PN.

Información recopilada de los diarios: El Universo, El Comercio, Expreso, El Hoy.

* Investigadora del Programa DSD.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ORGANIZÓ SEMINARIO SOBRE SEGURIDAD COMO CONTRIBUCIÓN AL DEBATE LEGISLATIVO

Bertha García Gallegos.

Como una contribución al debate sobre la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que reemplazará a la antigua Ley de Seguridad Nacional del Ecuador, el Programa "Relaciones Civil-Militares/Democracia, Seguridad y Defensa", conjuntamente con la Escuela de Estado Mayor de la Policía Nacional y el auspicio de las Fundaciones Konrad Adenauer, Open Society, Embajada de Francia y Ministerio de Defensa, organizó a comienzos de Junio, el Seminario: **"Estrategias Nacionales de Seguridad en un escenario mundial de complejidad y cambios"** que tuvo lugar en el Auditorio Mayor del Centro Cultural. Durante dos días frente a un numeroso auditorio, expertos internacionales y analistas nacionales examinaron temas como las nuevas estrategias nacionales de seguridad de los países europeos; Seguridad en la frontera norte del Ecuador. Seguridad pública y crimen organizado en América latina, con exposición de casos de México, Perú y Colombia.

En general "los estados no han acudido a la práctica de explicitar los conceptos y estrategias de seguridad, y se ha hecho muy difícil cambiar las nociones y las estructuras existentes desde la guerra fría", en gran parte por el peso de las agendas y políticas tradicionales de seguridad de los Estados Unidos. En América Latina también por la histórica tradición de las élites políticas de dejar en manos de los militares la elaboración de las reformas legales en ese campo. En el caso del Ecuador, la gran preocupación en la última década sobre el tutelaje militar que aumentó la inestabilidad política del país, el avance de los estudios más académicos sobre los derechos humanos; el interés sobre los problemas del medio ambiente, consolidaron una corriente de ideas que se introdujeron en el proceso constituyente del 2008.

Debemos entender que un proceso constitucional es un hecho político más complejo que la mera voluntad o la conciencia de los legisladores individuales que participaron en él, incluso que

el conjunto del mismo cuerpo legislativo. Las experiencias sociales, nuevas ideas y valores presentes ya en el Ecuador actual, se "filtraron" sin duda en ese proceso y dieron forma a un "producto" social nuevo, que en el caso de la Seguridad permitió introducir elementos de una doctrina jurídica inclinada más hacia la primacía de las personas y sus derechos, antes que al Estado tal como se expresaba en la antigua Ley de Seguridad Nacional elaborada en las dictaduras militares.

El hecho de que las autoridades actuales del sector y los mismos comisionados de la Asamblea transitoria encargados de dar forma a la nueva Ley, hayan encontrado enormes dificultades para elaborar un nuevo cuerpo legal que plasme los avances constitucionales y su espíritu acentuadamente garantista demuestra la persistencia de grandes distancias entre la voluntad ciudadana y los representantes del poder, aunque éstos sean considerados como nuevos. De modo que sacar a la luz la estrategia de seguridad contenida en la constitución requiere aplicar elementos teóricos y experiencias avanzadas y apropiadas al momento que se vive en el mundo y en la región. Por lo menos en términos comparativos con procesos semejantes en la región y en el mundo, ya que las amenazas o desafíos a la seguridad son fenómenos relacionales y exigen perspectivas cooperativas.

Las tendencias en los países más avanzados hasta comienzos del siglo XXI había sido la de mantener una diferenciación de las fuentes de riesgo: las internas, que afectaban a la seguridad individual de ciudadanos y propiedades individuales, y las externas, que amenazaban a la supervivencia del propio Estado. Por tanto, separaban nitidamente entre la dimensión exterior e interior de la seguridad. "La globalización hizo vulnerables las fronteras, los estados se hicieron más interdependientes y adoptaron medidas y prácticas más avanzadas para cooperar entre sí. Se comenzó a borrar relativamente la separación entre seguridad interior y exterior; entre política de defensa y la de seguridad pública". Como resultado, "la insegu-

ridad se fue desplazando a un espacio nuevo e intermedio entre la defensa y la seguridad ciudadana donde se instalaron riesgos de difícil respuesta como el crimen organizado, los tráficos ilícitos, la proliferación nuclear, las bandas urbanas, los conflictos étnicos, los deterioros medioambientales y el desmoronamiento de los estados frágiles, entre otros⁸. Sin embargo, bajo una óptica de Seguridad Humana, los mencionados estados han extremado los controles legislativos y jurídicos sobre la actuación de los agentes de seguridad y sus prácticas en el uso de la fuerza.

En países con estructuras políticas menos consolidadas como la nuestra, donde las atribuciones del poder legislativo han sido significativamente mermadas y el poder judicial está siempre en construcción, sería arriesgado para la democracia borrar los espacios que separan a la seguridad exterior de la interior y entre los sistemas que implican directamente el uso de la fuerza del Estado (fuerzas armadas y policía) de aquellos que no la requieren directamente (seguridad ambiental, seguridad energética y otros mencionados en la Constitución) donde es necesario desarrollar nuevos recursos humanos y del Estado, incluyendo las fuerzas del Estado, pero bajo otra visión doctrinaria. En América Latina, salvo quizá Argentina que ha desarrollado normativas claras al respecto, los grupos políticos dirigentes no construyeron ninguna experticia civil en estos

8. Arteaga Félix. "Hoja de ruta para una Estrategia Nacional española. ARI 112/2008 - 22/09/2008. Instituto Real Elcano, Madrid. <http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal>
En estas páginas nos referimos a su texto de manera resumida o textual

temas, y este déficit persiste actualmente con la inestabilidad de los funcionarios del sector. En Ecuador ha sido notoria la dificultad de los actuales funcionarios de esas áreas del Estado para interpretar el espíritu garantista de la Constitución, así como a esquematizar las estructuras institucionales y a no definirlas, dejando que leyes secundarias se encarguen de las partes más sensibles de su puesta en práctica.

Los debates realizados en el Seminario organizado por la PUCE, pusieron atención sobre estos aspectos, a partir de experiencias actuales que fueron expuestas por los expositores invitados. Sobre todo se habló de la importancia de que los gobiernos expliciten por escrito sus estrategias para que todos conozcan el alcance del nuevo contrato social entre estados y sociedades. De allí que los instrumentos conceptuales deben ser claros y los diversos componentes estratégicos, bien identificados. Es verdad de que las sociedades latinoamericanas, deben tener cuidado en establecer las debidas distancias con los ejemplos que nos muestran las sociedades avanzadas, en cuanto a los desafíos que enfrentan y que son percibidos por sus gobiernos. Tenemos menos tradiciones democráticas y escasa cultura de la seguridad; carecemos aún de solidez y estabilidad política; las instituciones de defensa y seguridad muestran características corporativas y de autonomía, lo que disminuye la capacidad de dar respuestas ágiles y coordinadas a los problemas de seguridad. Pero en todo caso, es preciso nutrirse de las experiencias que nos preceden, cuando ellas luchan por superar tendencias autoritarias en estos ámbitos.



Acto Inaugural del Seminario. Dra. Bertha García, Directora del Programa DSD, Dr. Manuel Corrales Pascual S.J., Rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Dr. Berthold Weig, Representante para el Ecuador Fundación Konrad Adenauer.



Miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, participantes del Seminario Internacional "Estrategias Nacionales de Seguridad en un Escenario Mundial de Complejidad y Cambios Sociales y Políticos".

CRONOLOGÍA DEFENSA, SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA

Paola Escobar Garzón*

El Observatorio Político Defensa, Seguridad Pública y Ciudadana, da seguimiento a los acontecimientos más importantes que competen a las instituciones de **DEFENSA Y SEGURIDAD** (Fuerzas Armadas, Policía Nacional) En el período mayo - junio del 2009 resaltan cuatro temas principales de análisis e información.

1. POLICÍA Y SEGURIDAD CIUDADANA

Policía avaló la entrega de coordenadas DE PUESTOS DE LAS FARC.- Ninguna de las 108 coordenadas de puestos de las FARC en Ecuador, entregadas en diciembre de 2007 al Gobierno, correspondía a Angostura, en Sucumbios. Pero tres de ellas identificaban a instalaciones cercanas. Las coordenadas fueron entregadas por los organismos de seguridad de Colombia. El encargado de transmitir los datos fue el entonces agregado de Policía en Bogotá, Juan Carlos Barragán. EL COMERCIO, Quito, 01/05/09

3 indagaciones en contra del GAO.- Siguen los cuestionamientos al trabajo del Grupo de Apoyo Operacional de la Policía (GAO). El primer caso fue denunciado en marzo en Quito, por supuestas torturas a los detenidos en el caso Terranova; dos denuncias más se hicieron públicas en la última semana. Una en Manabí y otra en Esmeraldas, por presuntos asesinatos. EL COMERCIO, Quito, 02/05/09

Ecuador busca nuevo modelo en sistemas de inteligencia y seguridad.- Para evitar que fallos en los organismos de defensa se repitan, como ocurrió tras el bombardeo militar colombiano contra un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano. Así lo informó el ministro de Defensa, Javier Ponce, en su discurso de inauguración del seminario internacional sobre doctrinas y modelos de inteligencia en América Latina y el Caribe, que se realiza en la sede de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). EL UNIVERSO, Guayaquil, 07/05/09.

Decreto que crea ente de Inteligencia se pule.- La creación de la Secretaría de Inteligencia es cuestión de días. El borrador del decreto ejecutivo está listo y solo restan las observaciones del presidente Rafael Correa. Las fallas en los sistemas de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía, a raíz del ataque del Ejército de Colombia en Angostura, que dejó 25 muertos, entre ellos el líder de las FARC, Raúl Reyes, apresuró al Gobierno a institucionalizar este organismo de control y supervisión del sistema. La máxima autoridad será una persona civil, nombrada por el Mandatario y que tendrá el rango de viceministro. La misión será coordinar los subsistemas de inteligencia tanto policial y militar. EL UNIVERSO, Guayaquil, 10/05/09

4 ministerios guiarán a Inteligencia.- El Régimen quiere que los cambios en el Sistema de Inteligencia Nacional sean como el trabajo de un cirujano: precisos y profundos. El decreto presidencial de creación de la nueva Secretaría de Inteligencia estará listo en los próximos días. Este será el punto de partida para el Sistema de Inteligencia, que ya está delineado. EL COMERCIO, Quito, 12/05/09

La Policía suspendió baja de Silva.- El Consejo de Generales de la Policía dejó el martes suspendida su decisión de solicitar la baja del mayor Manuel Silva, ex jefe de la extinta Unidad de Investigaciones Especiales, UIES hasta que la Inspectoría General amplíe un informe en el que se acusa al oficial de ausencia ilegal, agregando su defensa, informaron fuentes policiales. EL UNIVERSO, Guayaquil, 21/05/09

Fiscalía acusa a 5 policías de haber practicado tortura.- La fiscal Clara Aveiga inició instrucción en contra de 5 policías acusados de torturar a Alexander Cadena para que se declare culpable del asalto a la joyería Terranova, en el c.c. El Bosque, en marzo del 2008. Los agentes señalados son el capitán Hitler Martínez, ex jefe del departamento de Investigaciones Antidelincuenciales (DIAD); el mayor Diego Erazo, ex jefe del Grupo de Apoyo Operacional-GAO de Pichincha; la subteniente Ana Erazo, ex agente del DIAD; y los sargentos Élmer Ordóñez, ex agente del DIAD, y Jorge Espinoza, ex agente del GAO. EL UNIVERSO, Guayaquil, 22/05/09

Policía investiga la trata de personas en zona de frontera.- Autoridades de Migración de Tulcán e Ipiales (Colombia) están preocupadas porque en la zona de frontera se incrementó en un 35% la trata de blancas. Según agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), de Colombia, en la ciudad fronteriza de Ipiales, diariamente llegan mujeres procedentes de Cali, Pereira y Medellín con el objetivo de acceder a mejores ingresos. EL UNIVERSO, Guayaquil, 22/05/09

General Jaime Hurtado renunció a la jefatura de Policía.- El jefe de la Policía ecuatoriana, General Jaime Hurtado, renunció este jueves al cargo que desempeñaba desde abril de 2008 aduciendo motivos personales. El general dejó su cargo un día después de que dijera desconocer la posible presencia de líderes de las FARC en Ecuador, como reveló un informe del diario El Tiempo basado en fuentes de inteligencia. EL UNIVERSO, Guayaquil, 27/05/09

Diez generales de la Policía Nacional, de baja por relevo policial.- La decisión del presidente Rafael Correa de nombrar al general de distrito Freddy Eduardo Martínez Pico como nuevo Comandante General de la Policía dejó

afuera a diez generales de la institución, incluyendo al enunciante Jaime Hurtado. En su discurso de posesión al comandante, el presidente Correa no dio a conocer el por qué de su resolución. Se limitó a indicar que existen buenos y malos miembros de la institución. El general Martínez —quien es el sexto Jefe de la Policía en este régimen— tiene la primera antigüedad en su promoción y encabezó la cuarta terna de aspirantes a la Comandancia. Los generales destituidos fueron: General inspector Rafael García, ex jefe de Estado Mayor; general inspector Ramiro López, ex inspector General; Luis Ordóñez, ex director de Logística; general inspector Alfonso Camacho, ex director de Asuntos Civiles; general de distrito Juan Sosa, ex director de Operaciones; general de distrito Jorge Pavón, ex director de Personal; general de distrito Carlos Morales, ex director de Salud; general de distrito Sergio Torres, ex director de Tránsito; y, el general de distrito Carlos Flores, ex comandante del III Distrito (Azuay). EL UNIVERSO, 29/05/09

Inquietud por cesantía hace que nuevo jefe de Policía recorra el país.- En su segundo día como comandante General de la Policía Nacional, el general Freddy Martínez anunció que desde la próxima semana hará un recorrido por los comandos provinciales del país para tranquilizar a los mandos medios y bajos de la institución. Lo que preocupa al jefe policial es la tensión que existe por los rumores de la eliminación de la cesantía, alimentados por un discurso emitido el 20 de mayo pasado por el general Jorge Pavón, ex jefe de la Junta de Cesantía de la Policía. Estas palabras encendieron el ánimo del presidente Correa y, según la reflexión de un alto mando de la Policía, que pidió la reserva de sus nombres, sería la razón principal para la destitución de los diez generales de la cúpula. EL UNIVERSO, Guayaquil, 30/05/09

Orden telegráfica para espiar a la Justicia.- BLANCO Y NEGRO —boletín semanal del Diario Hoy— tuvo acceso a copias de comunicaciones de jefes policiales sobre la medida, con base en lo resuelto supuestamente en una reunión entre varias autoridades. Muchos jueces y fiscales a escala nacional podrían estar sometidos —desde mediados de mayo— a actividades de contrainteligencia como medida preventiva contra la corrupción, según una disposición que se repartió en los despachos de la Policía Judicial en todo el país y que sería consecuencia directa de un acuerdo entre dependencias del Ejecutivo y el aparato judicial. DIARIO EL HOY, Quito, 01/06/09.

Con orden para espiar.- Un oficio remitido por el ex director nacional de Operaciones de la Policía, Juan Sosa Barreno, dirigido al entonces director nacional de la Policía Judicial e Investigaciones, Oswaldo Yépez Cadena, y fechado el 8 de mayo de 2009, reveló un plan para espiar a jueces y fiscales como una supuesta medida en contra de la corrupción, según reveló ayer el suplemento BLANCO Y NEGRO. DIARIO EL HOY, Quito, 02/06/09

La orden de 'espiar' queda sin efecto.- El ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, en la continuación del diálogo mantenido el lunes con este Diario, ratificó que en la reunión del 8 de mayo pasado, entre varias autoridades, no se dispuso ninguna acción para espiar a jueces y fiscales, con lo que refutó la versión policial de que en esa misma fecha se dispuso realizar contrainteligencia a esos funcionarios judiciales. Esa orden, comentó, no tuvo aplicación y lo único que se hizo es trasladar al Ministerio Público (Fiscalía) la información que había sido solicitada por el delegado de esa entidad en el encuentro de autoridades del 8 de mayo. DIARIO EL HOY, Quito, 03/06/09

Ejecutivo envía a la Asamblea proyecto de Seguridad Pública y de Estado.- La propuesta establece estrategias de acciones para garantizar la seguridad de la población ante riesgos, amenazas internas y grave conmoción social. El proyecto de Ley de Seguridad Pública y de Estado, entregado por el presidente de la República, Rafael Correa, contiene 23 artículos, tres disposiciones transitorias y una final. Según el documento, el Ministro de Gobierno será el responsable de coordinar las acciones entre la Policía y la fuerza pública. El proyecto crea un sistema de seguridad pública y un Comité de Seguridad Pública integrado por el Presidente de la República, el Vicepresidente, los presidentes de la Asamblea Nacional, Corte Nacional de Justicia, los ministros de Coordinación de Seguridad Interna y Externa, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Comandante General de la Policía Nacional. Los ministerios de Defensa, Cancillería y Fuerzas Armadas serán órganos ejecutores de la defensa, mientras que el Ministerio de Gobierno y la Policía, del orden público. Además, las entidades del Estado, de la prevención y las entidades públicas y privadas nacionales y locales les corresponde la gestión de riesgo. EL UNIVERSO, Guayaquil, 03/06/09

Gobierno niega una ola de bajas en la Policía Nacional.- El ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, insiste en que no hay una ola de solicitudes de baja en la Policía Nacional. Puntualiza que las bajas se producen por muerte, mala conducta, sentencia condenatoria y retiro voluntario. "Las solicitudes responden a una planificación anual, estructurada con base a lo que determina el marco jurídico institucional, mas, en ningún caso a temores de los afiliados que miren con desconfianza la afectación de su beneficio de cesantía", señala el Ministro. Agrega que, por tanto, "los rumores infundados sobre una eventual afectación a la cesantía... no han causado ningún efecto en el número de bajas voluntarias ni tampoco como se ha insinuado es un fenómeno masivo...". EL UNIVERSO, Guayaquil, 05/06/09

Fiscal abre indagación sobre medidas de contrainteligencia y llama al general Sosa.- El ex director general de Operaciones de la Policía Nacional, general Juan Sosa, deberá revelar el nombre de la autoridad superior que le dispuso realizar "contrainteligencia" de las actividades de jueces y fiscales o aclarar las razones que tuvo para

ordenar, por su cuenta, ese tipo de tareas. EL UNIVERSO, Guayaquil, 05/06/09

Ejecutivo dice que se distorsiona Ley de Inteligencia.-

El presidente Rafael Correa criticó ayer los comentarios de prensa que observan el proyecto de Ley de Seguridad Pública y del Estado, en el que se restituyen los gastos especiales o reservados para actividades de inteligencia —en el plano interno— y se crea la Secretaría Nacional de Inteligencia, con dependencia directa al Ejecutivo. DIARIO EL HOY, Quito, 10/06/09

Fuerza pública hace reparos a estructura de Inteligencia.-

La polémica en el análisis de la Ley de Seguridad Pública y del Estado se centra en la designación del Secretario Nacional de Inteligencia, que ejecutará las políticas de seguridad, y en la facultad que se otorga al Ministerio de Gobierno para coordinar las acciones de las FF.AA en mantenimiento del orden en casos de conmoción o crisis interna. A ello se suma el debate respecto a la reactivación de fondos reservados para actividades de inteligencia y contra-inteligencia para la protección interna, cuyo uso no se someterá a las restricciones de la Ley de Contratación Pública. Esos temas fueron parte de la discusión de ayer en la Comisión de Asuntos Internacionales del 'Congresillo', con la presencia del jefe de Estado Mayor de la Policía, Florencio Ruiz, y del comandante del Ejército, Ernesto González. EL UNIVERSO, Guayaquil, 10/06/09

El control es el flanco débil del proyecto de Ley de Seguridad.-

La influencia del Presidente en la elección del Secretario de Inteligencia es criticada. Se busca que sus tareas sean supervisadas por fuera del Ejecutivo. El asambleísta Luis Hernández, de la Comisión de Relaciones Internacionales del 'Congresillo', dice que existe el riesgo de que el trabajo de Inteligencia responda a los intereses del Gobierno de turno y no del Estado. Esa es la principal duda, pues el borrador del proyecto de Ley de Seguridad Pública, en el que se incluye la creación de la Secretaría de Inteligencia, determina que este organismo estará bajo la dirección del Ministerio de Seguridad Interna y Externa. EL COMERCIO, Quito, 11/06/09

2. ASUNTOS DE DEFENSA Y MILITARES

Aclaran el régimen de ascenso en FF.AA.- El Ministerio de Defensa aclaró ayer, mediante un comunicado, que únicamente los consejos de generales del Ejército, de la Marina y de la Aviación están facultados para aprobar ascensos en las Fuerzas Armadas (FF.AA), y no el Presidente de la República o el Ministro de Defensa. Esta aclaración coincidió ayer con los rumores sobre supuestos cambios en la cúpula de las FF.AA. Todos los ascensos son aprobados por el Consejo de Generales y firmados mediante decreto ejecutivo por el Jefe de Estado. Según el comunicado, con el propósito de "alivianar el trabajo del Presidente de la República", se planteó un proyecto de reforma a la Ley de Personal de las FF.AA para que el

Mandatario suscriba los decretos ejecutivos de ascensos a partir del grado de coroneles y generales. "En consecuencia, el Primer Mandatario no es quien escoge los ascensos, sino que suscribe y solemniza estos", señala el texto. La reforma plantea que para los grados de menor rango, el Mandatario delegue al Ministro de Defensa la firma de los ascensos. EL UNIVERSO, Guayaquil, 09/05/09

Aviones israelíes para control de narcotráfico llegarán en junio.-

Los aviones no tripulados apoyarán a la Marina en el control de actividades ilícitas en la costa del país, informó este lunes el ministro de Defensa, Javier Ponce. "Van a llegar ya en el próximo mes los aviones no tripulados que van a permitir un mejor control del narcotráfico porque van a articularse con todo el sistema de control en el mar que realiza la Marina, frente al aumento significativo del narcotráfico", dijo. EL UNIVERSO, Guayaquil, 24/05/09

Ministro de Defensa, Javier Ponce, pide investigar sobre Bocana del Búa.-

La presencia de un grupo armado colombiano en la zona de Bocana del Búa, entre Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas, es investigada por la Fiscalía de la Nación. El fiscal Washington Pesántez inició esta indagación por pedido del ministro de Defensa, Javier Ponce, quien en su denuncia se refirió a los hechos relatados en el libro 'El juego del camaleón, los secretos de Angostura', del periodista Arturo Torres. En el libro, Torres denuncia la presencia de un grupo armado que entre 2005 y 2008 ejecutó a más de 10 campesinos en Bocana del Búa. Como respaldo a su denuncia, Torres, coordinador de información de este Diario, recopiló los partes de los asesinatos y viajó a la zona donde recogió testimonios de familiares de las víctimas, hacendados, uniformados. EL COMERCIO, Quito, 12/06/09

3. RELACIONES ECUADOR - COLOMBIA

Cuatro jefes de las FARC se refugian en el Ecuador, según Colombia.-

Un informe publicado por diario El Tiempo, de Colombia, aseguró ayer que los guerrilleros de las FARC, Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez; Ángel Gabriel Lozada, Édgar Tovar; Sixto Cabaña, Domingo Biojó; y Jorge Torres Victoria, Pablo Catatumbo, se refugian en el Ecuador. Dato de Inteligencia señala que Édgar Tovar se mueve entre Puerto Nuevo y Puerto Mestanza. Con esta declaración, el ministro de Defensa, Javier Ponce, respondió al informe de seguimiento que las autoridades colombianas difundieron ayer sobre los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que utilizan a los países vecinos para refugiarse. EL UNIVERSO, Guayaquil, 26/05/09

Falta aporte de Colombia para atender a refugiados.-

El Ecuador es el país de América Latina que alberga a más refugiados y desplazados por el conflicto interno de Colombia. La acción humanitaria del Estado ecuatoriano tiene un costo para cuyo financiamiento cuenta con la ayuda de la Acnur, pero no, como se debería, con el aporte del

propio Gobierno de Colombia, que está obligado a atender la situación de sus ciudadanos. Desde al año 2000 hasta el 15 de mayo de 2009, la Cancillería ecuatoriana ha registrado a 26 167 colombianos; alrededor de 135 mil no se hallan registrados legalmente. Hasta marzo de 2010 se proyecta registrar a 50 mil, según cifras oficiales. DIARIO EL HOY, Quito, 01/06/09

Oficialismo insiste en que Base de Manta sirvió para bombardeo en Angostura.- María Augusta Calle, militante del movimiento oficialista Alianza País (AP), denunció que, según un documento remitido por la Mesa 9 de Soberanía de la entonces Asamblea Constituyente y con carácter de reservado, la base militar estadounidense de Manta habría participado en el bombardeo colombiano en Angostura. De acuerdo a Calle, el Puesto de Operación de Avanzada (FOL) habría remitido un documento con carácter reservado en el que se indicaba que la aeronave con matrícula norteamericana HC130USGC, realizó un vuelo de más de 9 horas en una misión antinarcóticos en el que solo se justifican 50 minutos de vuelo durante el trayecto Manta-Mibar-Manta, sin justificar ni establecer la ubicación del avión en el tiempo restante. DIARIO EL HOY, Quito, 04/06/09

4. RELACIONES ECUADOR - ESTADOS UNIDOS

Canciller Falconí destacó la necesidad de un mutuo entendimiento con EE.UU.- El ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, Fander Falconí, defendió hoy la necesidad de crear condiciones para una relación de mutuo entendimiento" con Estados Unidos y también la de ampliar el horizonte de las relaciones internacionales a países

como Irán y Rusia. En una entrevista con Teleamazonas, el canciller aseguró que "las cosas están avanzando bien" en la decisión de "crear las condiciones para una relación bilateral de mutuo entendimiento y de reconocimiento mutuo" con Estados Unidos. EL COMERCIO, Quito, 08/05/09

Estadounidenses saldrán de Base de Manta en septiembre.- La embajadora de Estados Unidos en Ecuador, Heather Hodges, en declaraciones a radio Quito, ratificó ayer que en septiembre los militares estadounidenses abandonarán la base de Manta para dar cumplimiento al pedido del Gobierno. La diplomática aseguró que su país está dispuesto a mejorar las relaciones con Ecuador y aumentar la cooperación bilateral en un marco de respeto. El canciller Fander Falconí subrayó que el Gobierno tiene interés de mejorar las relaciones diplomáticas y comerciales de largo plazo con Washington, para ampliar una agenda de cooperación que no necesariamente implique la lucha contra el narcotráfico. EL UNIVERSO, Guayaquil, 08/05/09

EE.UU terminará labor antinarcóticos en el país en julio.- Las operaciones aéreas antinarcóticos de Estados Unidos desde el Puesto de Operaciones Avanzadas (FOL, por sus siglas en inglés), ubicado en la Base de Manta concluirán en julio de este año, después de que el Gobierno ecuatoriano decidiera no renovar el convenio binacional vigente hace diez años. EL UNIVERSO, Guayaquil, 16/05/09

* Investigadora del Programa DSD.

CONVENIO PUCE - KAS



BOLETÍN DEMOCRACIA, SEGURIDAD Y DEFENSA

Comité Editorial

Bertha García Gallegos
Francisco Rhon Dávila
Juan Pablo Aguilar Andrade
Raúl Benítez Manaut

Asesoramiento Internacional

Dr. Louis Goodman - American University (USA)
Dr. Gustavo Suárez Perterra - Real Instituto Elcano
(España)

Investigación

Paola Escobar Garzón

BOLETÍN DEMOCRACIA, SEGURIDAD Y DEFENSA

Toda correspondencia, favor dirigir a:

Av. 12 de Octubre y Patria
Universidad Católica. Torre 2, Piso 9, Oficina 901
Teléfonos:
(593-2) 299 1582

E-mail: bgarcia@puce.edu.ec

Correspondencia y solicitud de ejemplares del boletín:
e-mail: pfescobar@puce.edu.ec / bgarcia@puce.edu.ec